

Recurso de nulidad Laboral Rol I. C. 81-2020.

“Samuel Antonio Albornoz Sánchez contra Municipalidad de Río Claro”.

Talca, diecinueve de diciembre de dos mil veinte.

**Visto:**

Que en estos autos R. I. T. T-195-2018 R. U. C. 18- 4-0154684-3, mediante sentencia definitiva de treinta y uno de enero de dos mil veinte, el señor Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, resolvió rechazar las demandas de tutela laboral deducida por don Samuel Antonio Albornoz Sánchez, en contra de la Ilustre Municipalidad de Río Claro, como la acción de despido injustificado entre las mismas partes; y, acogió la demanda solo en cuanto la demandada deberá cancelar al actor la suma de \$1.722.174, por concepto de asignación de tramo y la cantidad de \$301.798, por reintegro de lo descontado por “descuento de sumario”, con el incremento señalado en el artículo 63 del Código del Trabajo. Se eximió del pago de las costas al actor.

En contra de esa sentencia la parte demandante de don Samuel Antonio Albornoz Sánchez, interpuso recurso de nulidad fundado en las causales previstas en el artículo 477 del Código del Trabajo, en subsidio, por el motivo indicado en la letra F) del artículo 478 del mismo cuerpo legal; en subsidio, por la causal de la letra B) del artículo 478 del precitado cuerpo normativo; y, también en forma subsidiaria, por el motivo de la norma 477 del cuerpo legal de la materia.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que se escucharon alegatos de ambas partes.



**CONSIDERANDO:**

**Primero:** Que la *primera causal de nulidad invocada, prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo*, fundado en que se infringieron derechos o garantías constitucionales en la tramitación del procedimiento y en la dictación de la sentencia, en relación al derecho al procedimiento racional y justo establecido en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República.

Afirma que la causal se funda en la emisión de juicios anticipados del resultado del fallo por parte del juez de la instancia, o lo que es lo mismo –prejuicios-, ocurrido en la audiencia de juicio de 14 de enero de 2020. Cuando esa parte intentaba rendir la prueba confesional consistente en la declaración del representante legal de la demandada, don Brian Robinson Pavez, Durante el interrogatorio, se verificó el siguiente dialogo:

“-Abogada Sra. Araya: *La convicción a la que se llegó, fue una convicción del fiscal, ¿en que se basó, recuerda?*

-Absolvente Sr. Robinson: *En las declaraciones.*

-JUEZ SR. BRUNA: *abogada, el tribunal no va a cuestionar el sumario, tampoco el procedimiento, no es facultad de este tribunal, para eso existen acciones legales y administrativas pertinentes, me interesa a mí –si va a declarar-, las características generales del sumario”.*

Ese dialogo determinó gravemente el curso de la audiencia y del resultado del juicio, por cuanto adelantó indefectiblemente el juicio del magistrado de la instancia afectando así la garantía constitucional a ser juzgado por un tribunal imparcial en un procedimiento racional y justo, conforme establece el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República. El juez no solo emitió opinión respecto al fondo del asunto, sino que explícitamente –



actuando contra lo ya resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca en este mismo juicio- procedió a declarar incompetente al tribunal respecto precisamente a las materias fijadas como controvertidas en la audiencia preparatoria.

Cita textualmente los puntos de prueba N° 1 a 3, afirmando que revisar el sumario y el procedimiento era la materia que debía avocarse el tribunal, tal como se estableció en los puntos de prueba indicados, lo que resulta concordante con lo resuelto en el fallo del recurso de apelación de la causa ROL I. C. 10-2019 que resolvió la admisibilidad de la denuncia, el que señala:

*“Cuarto: Que en relación a la competencia del tribunal del trabajo para conocer de acciones como la de autos, debe acudirse a una interpretación que*

*integre la legislación pertinente en términos que se respete el principio de inexcusabilidad que deben aplicar los tribunales al respecto. Así, si bien en el Estatuto Docente contenido en la ley N°19.070, no se contempla la acción de vulneración de derechos fundamentales, su artículo 71 previene que supletoriamente procede la aplicación del Código del Trabajo y sus leyes complementarias. A su turno el Código del Trabajo en su artículo 1° inciso penúltimo establece que los trabajadores que presten servicios en la Administración del Estado se sujetarán a las normas de dicho Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no sean contrarias a estos últimos.*

*Por su parte, el artículo 420 del Código del Ramo en su literal a) otorga competencia a los tribunales laborales para conocer de las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos*



*individuales o colectivos de trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral”.*

La falta de imparcialidad se concretó en el párrafo tercero del considerando undécimo de la sentencia, que señala: “... *Ahora bien, este sentenciador no entrará a juzgar si la decisión del Alcalde y las resoluciones del Fiscal, se ajustan o no a derecho, por carecer de competencia para ello y no ser este el procedimiento para revisar resoluciones del órgano municipal en materia disciplinaria, correspondiendo en el caso del sumario administrativo incoar los actos de impugnación que el ordenamiento aplicable dispone...*”. Luego, en los considerando décimo quinto y décimo octavo se repite el mismo tenor argumentativo.

En cuanto a aspectos de derecho, cita, conceptualiza y desarrolla la institución del debido proceso o proceso justo y cita las causales de impugnancia y recusación de los Arts. 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales, en específico, los números 8 y 10 respectivamente la de “*haber el juez manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente, con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia*” (impugnancia) y “*haber el juez manifestado de cualquier modo su dictamen sobre la cuestión pendiente, siempre que lo hubiere hecho con conocimiento de ella*” (recusación).

La decisión anticipada expresada por el juez de la instancia, determinó el resultado del juicio a razón de la supuesta incompetencia del tribunal para revisar el sumario administrativo incoado en su contra, lo que contradijo la resolución que recibió la causa a prueba de la causa, afectó sustantivamente la imparcialidad del juzgador, lo que llevó al rechazo de la demanda por cuanto no se revisaron los aspectos sustanciales a los que precisamente se debía avocar el tribunal conforme a los puntos de prueba fijados en la audiencia preparatoria. Se vulnera así la garantía que asiste al



denunciante a ser juzgado en un debido proceso, racional y justo, por un tribunal imparcial.

De no haberse incurrido en la causal de nulidad alegada, la demanda habría sido acogida, por cuanto se acreditó en juicio que el sumario incoado en su contra, estuvo plagado de irregularidades, falta de prueba, de una tramitación ignominiosa y negligentemente lenta, al punto que el demandante estuvo sindicado por 3 años como ladrón, entre otras vulneraciones debidamente expuestas en la demanda y acreditadas en estrado. Sin embargo nada de ello fue apreciado por el tribunal en razón de la supuesta incompetencia tantas veces señalada.

Hace presente que la vulneración producida por la emisión de juicio anticipado por parte del tribunal es una causal de implicancia, que no requiere alegación previa de la parte, sino que declaración de oficio. Sin embargo, el asunto reviste carácter grave como para trascender a la mera legalidad y, en cambio, ofende directamente derechos fundamentales garantizados en el N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política, de modo que se justifica por ello la interposición del recurso en virtud del inciso primero del artículo 477. Cita jurisprudencia en apoyo de su teoría jurídica. La infracción a la garantía constitucional invocada fue “sustancial”, ya que debió afectado “sustancialmente” la garantía invocada, remitiéndose a un análisis gramatical y citando el artículo 19 N° 26 de la Constitución Política de la República, que sostiene que los derechos y garantías no podrán ser afectados por autoridad alguna en su esencia. Cita fallos del Tribunal Constitucional.

Lo descrito anteriormente implica una importante afectación al derecho a la defensa de esa parte y generó obtener una sentencia desfavorable que conculcó derechos fundamentales.



En cuanto a la influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, se remite a lo expuesto precedentemente referido a la sustancialidad de la infracción.

***Como segunda causal de nulidad que se interpone en subsidio, alega la del artículo 478 letra f) del Código del Trabajo.*** La sentencia fue dictada en contra de otra pasada en autoridad de cosa juzgada y hubiere sido ello alegado oportunamente en el juicio. Describe la naturaleza jurídica de esa institución y que pretende velar por la seguridad jurídica al interior de nuestro ordenamiento jurídico, la que posee tres requisitos, siendo estos denominados “triple identidad”, consistentes en la identidad legal de partes, de objeto pedido y causa de pedir.

En el presente caso surgió una situación peculiar ya que la Corte de Apelaciones de Talca, conociendo del recurso de apelación de esa parte en causa ROL I. C. 10-2019 que resolvió la admisibilidad de la denuncia, señaló:

*“Cuarto: Que en relación a la competencia del tribunal del trabajo para conocer de acciones como la de autos, debe acudirse a una interpretación que*

*integre la legislación pertinente en términos que se respete el principio de inexcusabilidad que deben aplicar los tribunales al respecto.*

*Así, si bien en el Estatuto Docente contenido en la ley N°19.070, no se contempla la acción de vulneración de derechos fundamentales, su artículo 71 previene que supletoriamente procede la aplicación del Código del Trabajo y sus leyes complementarias. A su turno el Código del Trabajo en su artículo 1° inciso penúltimo establece que los trabajadores que presten servicios en la Administración del Estado se sujetarán a las normas de dicho Código en los*

*aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que*



*ellas no sean contrarias a estos últimos.*

*Por su parte, el artículo 420 del Código del Ramo en su literal a) otorga competencia a los tribunales laborales para conocer de las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos de trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral... ”. Señaló el fallo que la acción no se encuentra caduca y que el tribunal tiene competencia para conocer la materia.*

La demandada opuso como excepción a la demanda, la caducidad y la incompetencia del tribunal, que fueron resueltas en la audiencia preparatoria por el Tribunal, rechazando tales alegaciones.

De acuerdo a lo ya precisado anteriormente la competencia del Tribunal y del [señor] juez para conocer del asunto sometido a su decisión era una cuestión resuelta dos veces por sentencia ejecutoriada en causa rol I. C. 10-19 y en sentencia interlocutoria dictada en la audiencia preparatoria de 5 de agosto de 2019, sin embargo de lo anterior y desconociendo lo anterior el sentenciador en el fallo recurrido dispone que:

*“...Ahora bien, este sentenciador no entrará a juzgar si la decisión del Alcalde y las resoluciones del Fiscal, se ajustan o no a derecho, por carecer de competencia para ello y no ser este el procedimiento para revisar resoluciones del órgano municipal en materia disciplinaria, correspondiendo en el caso del sumario administrativo incoar los actos de impugnación que el*

*ordenamiento aplicable dispone... ”. La inconsistencia resulta evidente.*

Se está frente a sentencias definitivas contradictorias, por cuanto en dos se declaró la competencia del tribunal para conocer del asunto y del sumario, y en la última, en cambio, el juez declara no ser competente para conocer del sumario. Esto implicó contravenir el efecto de cosa juzgada que se



produjo respecto de la competencia del tribunal. Sostiene que se verifica la triple identidad, por cuanto ambas resoluciones judiciales fueron dictadas en el mismo procedimiento, las que describe. Resulta que la infracción del sentenciador que además el hecho de declararse incompetente, vulnera garantías fundamentales de esa parte. Cita jurisprudencia al efecto.

En cuanto a la influencia sustancial, se remite a lo expuesto referido a la sustancialidad de la infracción para dar cuenta de la forma en que dichas infracciones influyeron en o dispositivo del fallo, sin perjuicio de señalar que si se hubiese aplicado la cosa juzgada el sentenciador debía declararse competente para conocer del sumario y en definitiva analizar la prueba rendida en relación al mismo y en razón de ello, claramente se habría obtenido una sentencia favorable.

***Como tercera causal de nulidad interpuesta en forma subsidiaria a las anteriores, invoca la del artículo 478 letra B) del Código del Trabajo.*** La regla en comento está consagrada en el artículo 456 del Código del Trabajo, que cita y señala que sana crítica no es sinónimo de “libre apreciación de la prueba”, pues los criterios son diversos y si bien se da cierto margen al sentenciador, ello no puede transformarse en arbitrariedad o antojo. La norma citada obliga al Tribunal a expresar las razones para fundar su fallo, destacando las razones simplemente lógicas, es decir, debe hilar adecuadamente los diversos elementos que conducen a una resolución determinada. La lógica implica un proceso mental correcto y encaminado por los causes de las evidencias, obteniendo las conclusiones que forzosamente se deducen de los elementos conocidos. Asimismo, se indica que para llegar a una resolución que convenza al sentenciador, éste deberá tener en cuenta la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso.





Esta norma de análisis probatorio impone al sentenciador la obligación de dar claras y “rationales” argumentaciones de sus decisiones, para lo cual se le entrega pautas claras y precisas.

En la presente causa, la vulneración concreta se refiere al principio lógico de la razón suficiente. Cita literalmente el considerando undécimo de la sentencia definitiva, y respecto a la vulneración al principio de razón suficiente, que implica que toda consecuencia debe tener una causa, queda de manifiesto en que el [señor] juez de la instancia omitió el análisis del mérito de todos los antecedentes del sumario, que fueron rendidos como prueba en la oportunidad procesal. Siendo así, no se logra verificar el fallo llegó a la conclusión que implicó determinar que no existió vulneración a los derechos fundamentales, cuando el juez precisamente omitió analizar los antecedentes que era menester para acreditar o desechar la existencia de dicha vulneración. Insiste en que la resolución que recibió la causa a prueba señalaba expresamente en sus puntos 1, 2 y 3 que el tribunal debía analizar el mérito de las decisiones tomadas en el sumario incoado en contra del denunciante, siendo particularmente claro al respecto el tercer punto de aquellos.

Con todo, dicho análisis no se realizó, por cuanto el juez estimó incompetente al tribunal para esos efectos, contraviniendo así la resolución que recibió la causa a prueba y determinando una incongruencia lógica en el resultado final de la sentencia, que llegó a una conclusión sin analizar los antecedentes que obran en el proceso, o lo que es lo mismo, se infringe el principio lógico de la razón suficiente en los hechos acreditados. Hace presente que esto está directamente relacionado con el deber y facultad del juez de analizar no solo los aspectos formales de la sustanciación del proceso, sino que de los aspectos sustantivos del mismo, entre los que se comprende la racionalidad y fundamento de los actos administrativos que



figuran dentro del proceso sumarial. Una opinión contraria implicaría que el juez laboral pasaría a cumplir el rol de Contralor administrativo, según el cual su análisis solo se debería remitir al cumplimiento formal de las exigencias de los actos administrativos (lo que hizo el [señor] juez en esta causa), sin entrar a verificar el mérito sustancial de los actos que componen el procedimiento. En el considerando décimo quinto, la sentencia repite la argumentación falaz en virtud de la cual se extraen conclusiones sin análisis del soporte fáctico aportado como material probatorio. El fallo vuelve a reiterar la supuesta incompetencia para valorar la prueba aportada, y extrae con ello una conclusión sin haber valorado la prueba, lo que implica la infracción a un principio lógico de razón suficiente para sustentar el razonamiento. El mismo error se repite en el considerando décimo octavo, que reproduce literalmente.

En conclusión, es tan simple como esto: si el tribunal se declara incompetente para conocer la tramitación del sumario y sus resoluciones ¿en base a qué se está emitiendo su fallo? Nadie lo sabe. De modo que, por ello, se infracciona la valoración de los antecedentes probatorios, faltando la razón suficiente que sustente el razonamiento.

El error expuesto influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues la infracción lógica implicó que el tribunal tuviera por acreditada la justificación del proceder de la demandada, tanto respecto a la vulneración de los derechos fundamentales del trabajador como respecto al despido, todo lo cual se extrae sin analizar la prueba aportada al juicio, obteniéndose así una conclusión totalmente contraria a la que se arribaría en caso de haberse analizado efectivamente los antecedentes probatorios aportados por las partes. Desde otra perspectiva, el análisis del tribunal, al omitir valorar la prueba principal consistente en el sumario administrativo y el mérito de sus actuaciones, concluyó que no se ha probado vulneración de derechos



fundamentales ni existencia de un despido injustificado, conclusión a la que arriba sin valorar la prueba aportada al efecto, vulnerando así el principio lógico de la razón suficiente. En palabras simples, se extrae una consecuencia sin valorar la causa de la misma.

***Como cuarta causal de nulidad, interpuesta de forma subsidiaria a las anteriores, levanta la del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, dictación de sentencia con infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.*** Esta causal de nulidad, subsidiaria respecto al resto, se interpone por haber existido una interpretación y aplicación errónea de la ley, el sentenciador ha aplicado las normas contenidas en los artículos 118, 120, 123 de la Ley 18.883 –relativas a la destitución de funcionarios municipales- en circunstancias de que al denunciante le resultan aplicables las normas de su propio Estatuto Docente, siendo aplicable conforme al artículo 72, letra b) del mismo, sólo los artículos 127 al 143 de la Ley 18.883, sobre el procedimiento sumarial, más en ningún caso las normas sobre destitución de funcionarios municipales consideradas en la sentencia.

La aplicación errónea se ha traducido además en que se ha obviado el mandato legal y constitucional de inexcusabilidad –contemplado en el artículo

10 del Código Orgánico de Tribunales y en el artículo 76 de la Constitución Política de la República, en relación a lo señalado en el inciso primero del artículo 71 del Estatuto Docente, hoy contenido en el D.F.L. 1 de 1997, del Ministerio de Educación, y a lo dispuesto en los artículos 1, 168 y 485 y siguientes del Código del Trabajo.

***En cuanto a la infracción de ley respecto a la aplicación de normas no aplicables en la especie,*** el recurrente transcribe de la parte resolutive de la sentencia en análisis, la cita que se hace de los artículos 118, 120, 123,



138, 139 de la Ley N° 18.833, artículos 1, 72 letra b) del Estatuto Docente, y artículos 1, 63, 160 letra a), 173, 453 N° 1 y 456 del Código del Trabajo. Alega que el fallo utiliza como parte integrante de las consideraciones resolutivas tres normas que no se aplican al personal docente. El personal docente se regula por su propio estatuto, Ley 19.070, y subsidiariamente por el Código del Trabajo, sin perjuicio que para efectos de la tramitación de los sumarios se debe recurrir a las normas de la ley 18.883 por expresa remisión del artículo 72 letra b) del Estatuto de los profesionales de la educación, con las adecuaciones necesarias. La remisión a la Ley 18.883 no es supletoria al Estatuto Docente, sino que solo se aplican los artículos 127 al 143, más en ningún caso se pueden aplicar las normas sobre destitución de los funcionarios municipales de los artículos 118, 120 y 123, por lo que el fundamento de la parte resolutive de la sentencia constituye claramente infracción de ley infracción de ley, toda vez que todo el razonamiento jurídico del juez emana de la aplicación de normas que no les son aplicables al actor por expresa disposición legal, de manera que de haber aplicado las normas jurídicas que correspondían, esto es, el Código del Trabajo como norma supletoria y no la Ley 18.883 como lo hace el sentenciador, se habría obtenido una sentencia favorable.

El recurrente desarrolla lo que, en su parecer, es el sentido o interpretación correcto de la normativa contenida en los artículos 71 del D.F.L. 1 de 1997, del Ministerio de Educación, en relación a lo dispuesto en los artículos 1, 168 y 485 y siguientes del Código del Trabajo.

Sostiene que en concordancia con los fallos citados y la jurisprudencia en materia de tutela de derechos fundamentales, tanto de funcionarios públicos en general, como de personal docente en particular, resulta absolutamente claro que la disposición del artículo 71 del Estatuto Docente es una norma aplicable al caso, por cuanto en el estatuto de la Ley 19.070 no existe



procedimiento para reclamación de despido injustificado ni procedimiento para tramitar una denuncia de tutela de derechos fundamentales en un juzgado laboral. Lo anterior implica que el tribunal es competente para conocer de las medidas tomadas por la demandada, ya sea en la tramitación del sumario administrativo, como en las decisiones tomadas al respecto, lo que incluye el juicio de razonabilidad de plazos y pertinencia de los actos. Lo resuelto por el tribunal de la instancia en el sentido de excluir la revisión de la justificación del despido y de los indicios de vulneración de derechos fundamentales –ambas cosas que se incluían en las actuaciones y decisiones tomadas dentro del sumario administrativo, culminando en el despido- se aparta del deber legal de aplicar las normas del Código del Trabajo en aquellas materias no reguladas por el respectivo Estatuto. Concordando lo dispuesto en el artículo 71 del Estatuto Docente con la excepción del artículo 1 del Código del Trabajo, encontramos que este último, en cuanto a que no se aplicará la ley laboral a las relaciones estatutarias, se descarta a su vez con la contra excepción que retrotrae a la normativa laboral de aplicación general en aquellos casos en que alguna materia no esté regulada en el respectivo Estatuto. Este es el caso de las dos instituciones en comento: la reclamación judicial por despido injustificado y la tutela de derechos fundamentales. A partir de ello, considerando el principio de inexcusabilidad consagrado en los artículos 10 del C. O. T. y 76 de la C. P. R., el tribunal de la instancia debía revisar no solo los aspectos formales de los procedimientos incoados en contra del actor, sino que fundamentalmente los aspectos de fondo o sustanciales que constituían tanto la vulneración de derechos fundamentales, como las arbitrariedades que hacían devenir el despido en injustificado. Respecto a la tutela de derechos fundamentales, cita el motivo undécimo, afirmando que contraviene el artículo 71 del Estatuto Docente en concordancia con el artículo 1 y 485 y siguientes, del



Código laboral, por cuanto con ello el juez se excluye de conocer sobre un asunto que efectivamente debía resolver por estar en la esfera de su competencia. Lo mismo se puede decir de lo señalado en el considerando décimo quinto. Lo que debía razonar el juez era lo opuesto a lo decidido en el párrafo transcrito, siendo su rol principal revisar si la decisión del Alcalde y las resoluciones tomadas por el Fiscal en el sumario administrativo se ajustaban o no a derecho.

Por otra parte, respecto a la ***demanda de despido injustificado***, en el mismo error incurre la sentencia, eludiendo el deber legal de revisión de los antecedentes conforme a las normas citadas, en los siguientes términos del considerando décimo octavo, que nuevamente reproduce literalmente. El tribunal se negó a ponderar la aplicación de una institución básica del derecho laboral como es el perdón de la causal, por motivos erróneos, señalando no ser de su competencia revisar la inexcusable demora en la tramitación de los sumarios incoados en contra del actor, según lo señala en el considerando décimo noveno, que reiteradamente transcribe en su texto original. El error consistió en que el tribunal no aplicó la normativa laboral para conocer de los antecedentes expuestos para su conocimiento, rechazando abiertamente el texto del artículo 71 del Estatuto Docente, en concordancia con los artículos 1, 168 y 485 del Código del Trabajo.

Para remate, el sentenciador a la par de no aplicar la normativa que procedía conforme a lo expuesto, procedió a aplicar normativa expresamente excluida de una relación laboral docente, esto es, los artículos 118, 120 y 123 de la Ley 18.883 sobre destitución de funcionarios municipales, en circunstancias que dichas normas sólo son aplicables al personal municipal, pero no al personal docente.

El recurrente sostiene que existe infracción de ley respecto al principio de inexcusabilidad y competencia del tribunal para conocer del sumario.



Con el actuar precisado en el acápite anterior el juez ha infringido el principio señalado y consagrado constitucionalmente en el artículo 76 de la Constitución Política de la República, y a nivel legal, en el inciso segundo del artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, ya que reclamada la intervención del juez, siendo competente para ello se ha negado a conocer del sumario administrativo, declarándose incompetente, sin perjuicio de estar por ley obligado a conocer.

En cuanto a la forma en el los errores influyeron en lo dispositivo del fallo, se materializaron en la sentencia definitiva, determinando el rechazo de la demanda, por falta de aplicación de normas pertinentes y por aplicación de normas impertinentes, todo lo cual no habría ocurrido si el tribunal de primer grado hubiese aplicado correctamente la normativa que lo obliga a conocer de todos los aspectos puestos bajo su conocimiento, que son de su competencia, incluyendo las actuaciones del sumario administrativo, la justificación de las mismas, la negligencia en la tramitación del sumario, y en general todas las decisiones que culminaron con el despido del actor.

El demandante hace una prevención especial respecto a la resolución que recibe la causa a prueba, ya que los errores constatados en la sentencia definitiva son tan evidentes que fácilmente se puede verificar como los mismos se oponen “mayestáticamente”(sic) a la propia resolución que recibe la causa a prueba, la cual nuevamente y en forma innecesaria transcribe textualmente; y que ordenaba revisar los antecedentes que el juez de la instancia se negó a examinar para dictar la sentencia.

La obligación del juez de fondo de revisar dichos antecedentes estaba establecida en la causa, en concordancia con la normativa estatutaria y laboral ya tantas veces señalada, lo que no viene hacer más que corroborar la existencia de un error en la aplicación de la ley en la sentencia definitiva, que influyó sustancial y decisivamente en el fallo.



La parte demandante y recurrente solicita que en definitiva se declare lo siguiente:

1.- En virtud de la causal de nulidad principal, debiendo anularse la sentencia definitiva y dictarse la correspondiente sentencia de reemplazo, o en subsidio, anulando la sentencia definitiva y la audiencia de juicio, ordenando retrotraer el procedimiento al estado de celebrar nueva audiencia de juicio por juez no inhabilitado.

2.- En virtud de la segunda causal de nulidad, o en subsidio de la tercera causal de nulidad, o en subsidio de estas, de la cuarta causal de nulidad, debiendo anularse en cada caso la sentencia definitiva y dictarse la correspondiente sentencia de reemplazo.

Todo lo anterior, con costas.

**Segundo:** Que en opinión de esta Corte, y en relación con la causal principal de nulidad, del artículo 477 del Código del Trabajo, el recurrente no puede pedir la alteración de los hechos establecidos en la sentencia, pues ella tiene sólo por objeto fijar el recto sentido o alcance de las normas legales que se dicen afectadas, ya sea porque se desatienden en un caso previsto por ellas, cuando en su interpretación el juez contraviene fundamentalmente su texto o cuando les da un alcance distinto, ya sea ampliando o restringiendo sus disposiciones.

En el presente caso, la sentencia estableció en el motivo séptimo, como hechos inamovibles, la existencia de dos sumarios administrativos seguidos en contra del demandante, por dos infracciones administrativas, las que se dieron por acreditadas y que al recurrente le cupo responsabilidad, siendo sancionado conforme lo dispone el artículo 72 letra b) de la ley 19.070, Estatuto Docente, esto es, el término de su relación laboral por falta de





probidad y que al tenor de lo prescrito en el artículo 71 de ese cuerpo legal, lo hace incurrir en la infracción contemplada en el Artículo 160 numeral 1 letra a) del Código del Trabajo, esto es, conducta indebida de carácter grave, debidamente comprobada, que constituye una falta de probidad.

**Tercero:** Que respecto de la existencia del procedimiento llevada a cabo por el señor juez de mérito, la recurrente alega que hubo infracción a la garantía que establece el número 3 del artículo 19 de la Constitución, sobre el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial en un procedimiento racional y justo, cabe señalar en primer término, que no se planearon motivos de inhabilitación por parte del magistrado que celebró la audiencia respectiva, estando habilitado para ello, sin reproches sobre su imparcialidad.

Durante la celebración de las audiencias, el magistrado tiene las facultades de dirección y control que le reconoce el artículo 429 del Código del Trabajo, pudiendo rechazar aquellas probanzas que estime inconducentes, además de impedir el abuso del derecho y las actuaciones dilatorias, según lo dispone la norma siguiente de aquel cuerpo legal. Expresión de aquellas mismas facultades se refrendan en el número 4 del artículo 453 y número 5 de la norma siguiente de aquel Código, al entregarle facultades sobre el control de la prueba en cuanto a su pertinencia.

En ese orden de ideas, la dictación de resoluciones judiciales que digan relación con las facultades del señor juez, no afectan garantías constitucionales y tienen fundamento en el uso de facultades legales por un tribunal imparcial en un procedimiento racional y justo.

Por otra parte, la resolución de esta Corte, sobre la competencia del Tribunal de mérito para conocer del presente asunto, dice relación con la



facultad y el deber de llevar adelante el procedimiento y juzgar sobre las acciones y excepciones hechas valer por las partes, pero no guarda relación con la procedencia y valoración de los antecedentes probatorios sobre aquellas, respecto de los que el señor juez goza de plena independencia sobre ese proceso dialéctico y en la que esta Corte no emitió decisión sobre ello.

Asimismo, la fijación de los hechos a probar por las partes, dice relación con el sustrato fáctico que forma parte del asunto debatido, más no puede indicar antecedente alguno sobre los medios idóneos para su acreditación, los que deben pasar por el tamiz de la pertinencia y legalidad que les es exigible para poder válidamente, formar convicción sobre el sustrato fáctico, sin afectar los derechos de las partes del juicio. En este proceso valorativo no existe infracción alguna a las reglas del debido proceso ni las alegaciones del recurrente configuran aquella causal de invalidación.

Finalmente, la falta de ponderación sobre los aspectos reclamados por el recurrente, de los respectivos sumarios administrativos incoados en su contra, no pueden ser objeto de revisión en la judicatura laboral, ya que el procedimiento a que se sometió el demandante, dispone de su propio sistema recursivo y hace absolutamente incompetente a esta sede revisar el mérito de aquellos procedimientos, coincidiendo con ello, con el señor juez de mérito. No existe una competencia extendida para conocer de la cualidad jurídica de lo resuelto por un órgano administrativo, en uso de sus atribuciones legales y actuando en el ámbito de su competencia.

Por la vía de la valoración y control del procedimiento administrativo, no puede llegarse a la modificación de los hechos ni al análisis de la legalidad de éste, ya que significaría transformarse en un sistema extra legal, sin fundamento alguno en formas jurídicas.



Por lo anterior, se debe desestimar la nulidad por la causa precedente.

**Cuarto:** Que en lo que dice relación con *la segunda causal subsidiaria de invalidación que levantó el demandante, la de la letra F) del artículo 478 del Código del Trabajo*, fundada en las resoluciones dictadas en causa rol I. C. 10-19 y en sentencia interlocutoria dictada en la audiencia preparatoria de 5 de agosto de 2019.

Cabe precisar que aquellas resoluciones judiciales dicen relación con la facultad de conocer del presente juicio, en razón del principio de inexcusabilidad, pero no implica que ello, haga nacer competencia para la revisión de los sumarios administrativos, de los que deberá estarse a su existencia y a los efectos jurídicos que producen las decisiones administrativas que se encuentren ejecutoriadas.

La competencia está declarada respecto de la presente causa, que obliga al señor juez de mérito a recibir las alegaciones de las partes, sus respectivas probanzas y decidir por medio de sentencia definitiva las acciones y excepciones que fueron el objeto litigioso debatidos en estrados. La causa de pedir y el objeto pedido difieren en cuanto las primeras guardan relación con los actos de procedimiento y la sentencia con el fondo del asunto. Los derechos procedimentales y aquellos sustantivos difieren en cuanto al objeto y causa de pedir, sin que puedan los primeros limitar el análisis del derecho sustantivo, salvo en el caso de ilegalidad de los primeros, cuya declaración en este proceso fue rechazado.

Por lo anterior, se debe desestimar la nulidad por la causa precedente.

**Quinto:** Que en cuanto *a la tercera causal subsidiaria de nulidad invocada por la parte demandada, del artículo 478 letra B) del Código del Trabajo*, vulneración al principio lógico de la razón suficiente. Cita



literalmente el considerando undécimo de la sentencia definitiva, y respecto a la vulneración al principio de razón suficiente, que implica que toda consecuencia debe tener una causa, queda de manifiesto en que el [señor] juez de la instancia omitió el análisis del mérito de todos los antecedentes del sumario, que fueron rendidos como prueba en la oportunidad procesal.

Como primera cuestión, cabe señalar que no se desarrolló por la recurrente la causal precisa en que funda su alegación, esto es, no hizo un análisis de las contravenciones en que habría incurrido el juez en la apreciación de la prueba, en la que ponderó la totalidad de ella, según se lee en los considerandos séptimo, decimo, undécimo, decimoquinto y décimo sexto de la sentencia, en cuanto se relacionan con la acción y excepciones invocadas por las partes, sosteniendo y analizando el valor y calificación que se hace de los hechos acreditados, en que no se observa afectación al sistema de valoración de los elementos que permitieron resolver la demanda de autos.

Como ya se razonó precedentemente, la pretendida facultad de analizar la legalidad y procedencia del procedimiento adoptado en los respectivos sumarios administrativos, escapa al ámbito de competencia de la judicatura laboral, debiendo estarse al mérito de lo resuelto en esa sede, por medio de decisiones ejecutoriadas. No hubo, como lo sostiene el recurrente, omisión en la valoración de esos antecedentes, sino que se debió resolver la acción conforme al valor inmodificable de esos sumarios, por no tener facultades fiscalizadora, de control de las decisiones ni ser cuestionadas en esta sede, materias y procedimientos que disponen de su propio sistema recursivo.

En ese sentido, el análisis de la sentencia en estudio expuso las razones suficientes para otorgarle el valor que correspondía a esos sumarios, no hubo la tan reclamada omisión de su valoración, sino que debió ser



ponderada al tenor de su mérito, discurriendo sobre las razones que el órgano jurisdiccional tuvo en consideración para su valoración. Cuestión diversa es que el recurrente discrepe de ellas y pretenda convertir a la judicatura laboral en sede de revisión fuera de la legalidad, de esa facultad administrativa y sin norma que la consagre en tal sentido.

Por lo anterior, no existen afectaciones sobre las razones jurídicas y las implemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud le asignó valor a los elementos que estimó que formaban la convicción del juez, según se señala en el artículo 456 del Código del Trabajo y por ello, no constituyen causal de nulidad del juicio.

**Sexto:** Que sobre la *última causal subsidiaria* de nulidad que alegó la recurrente, *la del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, dictación de sentencia con infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.* Esta causal de invalidación se interpone por haber existido, según el recurrente, una interpretación y aplicación errónea de la ley, al aplicar las normas contenidas en los artículos 118, 120, 123 de la ley 18.883 –relativas a la destitución de funcionarios municipales- en circunstancias de que son aplicables las normas del Estatuto Docente, conforme al artículo 72 b) del mismo, los artículos 127 al 143 de la Ley 18.883, sobre el procedimiento sumarial, más en ningún caso las normas sobre destitución de funcionarios municipales consideradas en la sentencia. Reitera el recurrente que la disposición del artículo 71 del Estatuto Docente es norma aplicable al caso, en la Ley 19.070 no existe procedimiento para reclamación de despido injustificado ni para tramitar denuncia de tutela de derechos fundamentales en un juzgado laboral. Ello implica que el tribunal es competente para conocer de las medidas tomadas por la demandada, ya sea en la tramitación del sumario administrativo,



como en las decisiones tomadas al respecto. La exclusión de la revisión de la justificación del despido y de los indicios de vulneración de derechos fundamentales –ambas cosas que se incluían en las actuaciones y decisiones tomadas dentro del sumario administrativo, culminando en el despido- se aparta del deber legal de aplicar las normas del Código del Trabajo en aquellas materias no reguladas por el respectivo Estatuto. Este es el caso de las dos instituciones en comento: la reclamación judicial por despido injustificado y la tutela de derechos fundamentales. A partir de ello, invoca el principio de inexcusabilidad consagrado en los artículos 10 del C. O. T. y 76 de la C. P. R., y el tribunal de la instancia debía revisar los aspectos formales de los procedimientos incoados en contra del actor, y fundamentalmente los aspectos de fondo o sustanciales que constituían tanto la vulneración de derechos fundamentales, como las arbitrariedades que hacían devenir el despido en injustificado. Sobre la tutela de derechos fundamentales, cita el motivo undécimo, afirmando que contraviene el artículo 71 del Estatuto Docente en concordancia con el artículo 1 y 485 y siguientes del Código laboral, por cuanto con ello el juez se excluye de conocer sobre un asunto que efectivamente debía resolver por estar en la esfera de su competencia. Lo mismo se puede decir de lo señalado en el considerando décimo quinto. Lo que debía razonar el juez era lo opuesto a lo decidido, siendo su rol principal revisar si la decisión del Alcalde y las resoluciones tomadas por el Fiscal en el sumario administrativo se ajustaban a derecho.

**Séptimo:** Que en opinión de esta Corte, el análisis de los aspectos sustantivos y adjetivos del sumario administrativo llevado en contra del demandante, no puede ser objeto de examen, revisión y control en esta sede jurisdiccional, ya que dispone de su propio sistema recursivo y se debe estar



a la situación legal que nace de ese procedimiento, por carecer de facultades para ello, este sede laboral.

No se trata de la afectación del principio de inexcusabilidad, sino que de la existencia de facultades que el ordenamiento jurídico entrega a esta sede judicial, la que sólo debe estarse a las situaciones jurídicas que teniendo el carácter de ejecutoriada, no pueden ser alteradas, modificadas o revocadas en base a un control que no está entregado a los órganos jurisdiccionales, en esta materia. Asimismo, la acción administrativa, en cuanto procedimiento en contra del demandante, contempla un sistema recursivo que debió ser empleado por el actor, ante los superiores jerárquicos. En tal circunstancia, el estatuto legal que nace del sumario, con los respectivos derechos y obligaciones que se configuran por medio de las resoluciones ejecutoriadas constituyen hechos inmodificables por la vía de afectación de garantías constitucionales, en especial, del debido proceso, en cuanto se permitió en sede administrativa el pleno ejercicio del derecho a defensa ante órgano competente para conocer de la responsabilidad funcionaria del recurrente.

**Octavo:** Que en cuanto al rechazo de la demanda sobre despido injustificado, el recurrente levantó la misma causal anterior en contra de la sentencia, esto es, la del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción a normas legales, que dice relación con la causal sobre perdón de la causal por parte del empleador.

Cabe señalar que sin perjuicio de no existir norma jurídica que sancione la existencia de tal eximente de responsabilidad en favor del trabajador, el Tribunal de mérito estimó suficientemente justificada el tiempo empleado en la resolución de los sumarios administrativos, según se lee en el considerando séptimo N° 3 y 6, letra a), así como en el motivo décimo primero de la sentencia recurrida. Aquella tardanza no sólo está razonada y



debidamente argumentada, sino que se ha atribuyó responsabilidad personal al demandante, por lo que no parece plausible la alegación sobre el perdón del ofendido. Los sumarios siguieron su curso conforme el estado del procedimiento y no pueden interpretarse como terminación de los mismos el mero transcurso del tiempo, por hechos imputables al empleador y que impliquen la indulgencia de éste para la vigencia de la relación laboral, sin cuestionamiento ni reproche por parte del empleador.

Aquellos hechos son inmodificables para esta Corte, atendida la naturaleza de la causal esgrimida, y por ende, los fundamentos sobre la existencia de aquella exención de responsabilidad no tienen concordancia con los hechos acreditados por el señor Juez laboral, por el contrario, aquella se contradice con los supuestos fácticos que se tuvieron por acreditados y que no pueden variar por la vía de invalidación.

En cuanto a la afectación del principio de inexcusabilidad que se imputa al órgano jurisdiccional, debe precisarse que éste obliga a la resolución del conflicto planteado ante el órgano jurisdiccional, -como ha ocurrido en la especie, al desechar la demanda-, más no puede significar que deba afectar una situación jurídica que mediante el procedimiento respectivo, haya construido una situación jurídica, conforme a la legalidad vigente y que con las facultades suficientes, y se hayan establecido derechos y obligaciones para los que figuren como parte en esos actos -en este caso, administrativo-, los que configuran el sustrato fáctico y jurídico sobre la que debe resolver la controversia planteada ante el Tribunal competente.

La cita que se hace en el preámbulo de la parte resolutive de la sentencia, de los artículos que señala el recurrente, se debe tener presente que la mención de la normativa forma parte del marco jurídico que el órgano





jurisdiccional tuvo en consideración para la resolución del conflicto y no tiene efecto resolutorio de éste.

Sobre la resolución que recibió la causa a prueba, se debe ponderar que ella está referida precisamente a hechos que siendo pertinentes y substanciales, permiten resolver el conflicto. Los sumarios administrativos son expresión de la facultad fiscalizadora reconocida a través del Estatuto Docente, como de las Leyes 18.883 y 19.070, y crean un estado jurídico que debe ser acreditado, como lo exigió la resolución, pero no puede significar alteración de los derechos y obligaciones que se hayan constituido a través de ese mecanismo. No estamos en presencia de una competencia suprallegal e inquisitoria que permita desconocer lo resuelto en sede administrativa.

Por lo anterior, se debe desestimar la alegación anterior que se planteó por el recurrente.

**Noveno:** Que por lo expuesto en los considerandos precedentes, el presente recurso de nulidad no podrá prosperar y deberá ser desestimado.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 162, 474, 477, 478 letras b) y f); así como del 482 del Código del Trabajo, ***SE RECHAZA*** el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia definitiva de treinta y uno de enero de dos mil veinte, dictada en la causa R. I. T. T-195-2018 R. U. C. 18- 4-0154684-3, del Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, la que en consecuencia, no es nula.

No se condena en costas al recurrente por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Carrillo González.



## **Rol I.C. 81-2020/Reforma Laboral.**

Se deja constancia que, pese a haber concurrido a la vista y al acuerdo de esta causa, no firma el Ministro don Carlos Carrillo González, por encontrarse haciendo uso de Feriado Legal, asimismo, no firma el Abogado Integrante don Ruperto Pinochet Olave, por encontrarse ausente.





SFBXHYNMING

Proveído por el Señor Presidente de la Segunda Sala de la C.A. de Talca.

En Talca, a diecinueve de diciembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>